



TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Santiago de Cali, cinco (05) de febrero de dos mil veintiuno (2021).

Magistrado Ponente:	OMAR EDGAR BORJA SOTO
Medio de Control	ACCIÓN POPULAR
Ref. Proceso	76001-23-33-000-2021-00200-00
Demandante	JOSÉ GABRIEL SALCEDO SÁNCHEZ Apdo: CARLOS ARTURO CARDONA GONZALEZ Correo: caracargo@gmail.com procabildorionima@gmail.com
Dermandados	AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES Correo: notificacionesjudiciales@anlagov.co GRUPO ENERGÍA BOGOTÁ S.A. E.S.P. Correo: notificacionesjudiciales@geb.com.co
Asunto	Inadmite demanda

Auto Nro. 30

ANTECEDENTES

El abogado CARLOS ARTURO CARDONA GONZALEZ actuando en representación del señor JOSÉ GABRIEL SALCEDO SÁNCHEZ instaura el presente medio de control de acción popular en contra de i) la AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES y el GRUPO ENERGÍA BOGOTÁ S.A. E.S.P.

Con fundamento en lo anterior, se procederá a verificar los requisitos de la demanda, en los siguientes términos:

1. JURISDICCIÓN.

Conforme al artículo 104 del CPACA la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está instituida para conocer además de lo dispuesto en la Constitución Política y en leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.

Aunado a ello, la Ley 472 de 1998 que regula lo relativo a la acción popular, indica:

“ARTÍCULO 15.- Jurisdicción. La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conocerá de los procesos que se susciten con ocasión del ejercicio de las Acciones Populares

originadas en actos, acciones y omisiones de las entidades públicas y de las personas privadas que desempeñen funciones administrativas, de conformidad con lo dispuesto en las disposiciones vigentes sobre la materia.”

Es así como se puede establecer que esta jurisdicción ostenta la jurisdicción para conocer del presente medio de control, atendiendo la calidad de entidades públicas que ostenta la parte accionada.

2. COMPETENCIA.

El artículo 152 del CPACA, dispone sobre la competencia funcional para conocer de la acción:

“Artículo 152. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. Los Tribunales Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:
(...)

16. De los relativos a la protección de derechos e intereses colectivos, reparación de daños causados a un grupo y de cumplimiento, contra las autoridades del orden nacional o las personas privadas que dentro de ese mismo ámbito desempeñen funciones administrativas.

La acción es dirigida, *entre otras*, en contra de entidades nacionales por lo que la competencia es de la presente Corporación.

3. REQUISITOS FORMALES

Establece el art. 18 de la Ley 472 de 1998, los siguientes:

“ARTÍCULO 18.- Requisitos de la Demanda o Petición. Para promover una acción popular se presentará una demanda o petición con los siguientes requisitos:

- a) La indicación del derecho o interés colectivo amenazado o vulnerado;
- b) La indicación de los hechos, actos, acciones u omisiones que motivan su petición;
- c) La enunciación de las pretensiones;
- d) La indicación de la persona natural o jurídica, o la autoridad pública presuntamente responsable de la amenaza o del agravio, si fuere posible;
- e) Las pruebas que pretenda hacer valer;
- f) Las direcciones para notificaciones;
- g) Nombre e identificación de quien ejerce la acción.”

Aduce la parte demandante la afectación de los siguientes derechos que denominó “colectivos”, veamos:

“Derecho al debido proceso
Derecho de contradicción
Derecho doble instancia
Obligación de dar publicidad de los actos administrativos
Derecho de acceso a la información ambiental
Derecho de participación comunitaria en temas medio ambientales
Derecho de aportar y controvertir pruebas”

Como soporte a lo anterior, solicitó como pretensiones las siguientes:

1. Que ordene notificar y comunicar el contenido de dicho acto administrativo a las comunidades, al Ministerio Público, a los alcaldes y gobernadores de los municipios y departamentos a que se contrae el hecho uno de este documento, al tenor de lo dispuesto en el CODIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TÍTULO I, CAPÍTULO V, ARTS. 65 A 73; ARTÍCULO 74 Y 76 en consonancia y armonía con el art. 70 de la Ley 99 de 1993.
2. Si aún no la ha realizado que ordene la publicación del mencionado acto en la Gaceta Ambiental de la página web de la ANLA, de conformidad con lo prevenido en el art. 71 de la Ley 99 de 1993.
3. Declarar que contra el acto administrativo 01646 procede el recurso de apelación para ante el DIRECTOR GENERAL DE LA ANLA, ya que el Señor Director funge como superior administrativo y funcional del SUBDIRECTOR DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA ANLA, funcionario que suscribe el mencionado auto, de acuerdo con lo prevenido en el Decreto 1076 de 2015 artículo 2.2.2.3.6.1. Numeral 7, en consonancia y armonía con el art. 74 del C.C.A.
4. Las demás medidas que ustedes HONORABLES MAGISTRADOS consideren pertinentes para que cese el estado de indefensión en que se encuentra la comunidad y los entes territoriales por la imposibilidad de ejercer el derecho de defensa técnica del territorio dentro del trámite administrativo de evaluación del diagnóstico ambiental de alternativas a la EMPRESA DE ENERGIA DE ENERGÍA DE BOGOTÁ E.S.P. (EEB) hoy GEB S.A. E.S.P. para el desarrollo del proyecto denominado “La Virginia-Alfárez 500KV y líneas de transmisión asociadas”
5. Que ordene notificar de manera personal o por vía electrónica el contenido del auto precitado a mis mandantes a las direcciones y correos detallados en el acápite de NOTIFICACIONES Y CANALES DE COMUNICACIÓN, conforme lo prevenido en los arts. 65 a 72 del C.C.A.

Las acciones populares fueron consagradas en el inciso primero del artículo 88 de la Constitución Política y desarrolladas por la Ley 472 de 1998, para que se puedan ejercer por cualquiera de los titulares previstos en el artículo 14 ibidem, entre ellos, “toda persona natural o jurídica”, con el fin de evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible.

Con fundamento en lo anterior, quiere resaltar esta Magistratura que de conformidad con el artículo 18 de la Ley 472 de 1998, uno de los requisitos de la demanda en el medio de control de acción popular, es precisamente determinar con claridad, entre otros, “a) la indicación del derecho o interés colectivo amenazado o vulnerado” y que los mismo, se encuentren ligados con “c) La enunciación de las pretensiones” pues no tendría sentido pretender la protección de un derecho colectivo, por ejemplo, la protección de un ambiente sano y paso seguido, se pretenda, la respuesta a un derecho de petición.

Lo anterior resulta de vital importancia para no solo enderezar la causa del proceso, sino también para que las partes en el ejercicio del derecho de defensa, propendan direccionar la Litis de forma adecuada.

En el caso concreto, se observa que la parte demandante confunde la protección de derechos fundamentales, tales como a) **debido proceso** que incluye el derecho de contradicción, a aportar y controvertir pruebas y de doble instancia, b) **derecho de petición** que incluye el acceso a la información ambiental y finalmente, la participación comunitaria que si bien es un derecho, no es fundamental dado que conforme a la Constitución, los mecanismos de participación son el plebiscito, referendo, consulta popular, cabildo abierto, iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato y el solicitado por el demandante no encaja en ninguno de ellos.

De esta forma, si bien los hechos y pretensiones de la demanda se desprende una aparente **ofrenda** al derecho colectivo a un ambiente sano, situación que daría a interpretar la demanda con el fin de garantizar el acceso a la administración de justicia, lo cierto es que las pretensiones no están dirigidas ni de forma meridiana a la consecuencia de tal fundamento petitorio, pues lo que persigue el demandante, en últimas, es participar de forma activa en el trámite administrativo (previo) adelantado por la EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA E.S.P. — EEB, en el que le solicitó a la accionada Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, un diagnóstico ambiental de alternativas para el Proyecto "Subestación La Virginia Alférez - 500 kV y líneas de transmisión asociadas", localizado en los departamentos de Risaralda y Valle del Cauca, en los municipios de Pereira, Risaralda; y Ansermanuevo, Andalucía, Bolívar, Buga, Bugalagrande, Cali, Candelaria Cartago, El Cerrito, Ginebra, Guacarí, La Unión, La Victoria, Obando, Palmira, Pradera, Riofrío, Roldanillo, San Pedro, Toro, Trujillo, Tuluá, Vijes, Yotoco, Yumbo y Zarzal en Valle del Cauca.

Así pues, no observa esta Magistratura que en el líbello de la demanda se hubiese señalado un derecho colectivo vulnerado, como por ejemplo, entre otros, - El goce de un ambiente sano. - La moralidad administrativa. - La existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. - La conservación de las especies animales y vegetales. - La protección de áreas de especial importancia ecológica y de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas. - Los demás intereses de la comunidad relacionados con la preservación y restauración del medio ambiente. - El goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público. - La defensa del patrimonio público. - La defensa del patrimonio cultural de la Nación. - La seguridad y la salubridad públicas. - El acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública. - La libre competencia económica. - El acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna. - La prohibición de la fabricación, importación, posesión, uso de armas químicas, biológicas y nucleares, así como la introducción al territorio nacional de residuos nucleares o tóxicos. - El derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente. - La realización de las

construcciones, edificaciones y desarrollo urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes. - Los derechos de los consumidores y usuarios, entre otros.

Así mismo, deberá la parte demandante adecuar las pretensiones de la demanda en el sentido de direccionar las mismas a la protección del derecho colectivo que considere vulnerado, pues la notificación y/o publicación de un acto administrativo o la procedencia de un recurso frente al mismo no tiene como consecuencia la protección de un derecho colectivo, sino la aparente afectación a un derecho fundamental, verbi gracia, debido proceso y/o derecho de defensa.

El Consejo de Estado también ha señalado que si la lesión de derechos colectivos origina también la vulneración de derechos individuales fundamentales, respecto de estos últimos la tutela es preferente¹.

En **conclusión**, se inadmitirá la demanda para que la parte actora indique con claridad cuál o cuáles son los derechos colectivos que considera amenazados o en riesgo de amenaza y con fundamento en ello, determinar la pretensión sobre la cual recae, debiendo existir una coherencia entre tales elementos.

Por lo anterior, el despacho,

RESUELVE

PRIMERO: INADMITIR la presente demanda popular instaurada por JOSÉ GABRIEL SALCEDO SÁNCHEZ contra la AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES y GRUPO ENERGÍA BOGOTÁ S.A. E.S.P., por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia

SEGUNDO: CONCEDER a la parte actora el término improrrogable de tres (3) días siguientes a la notificación de esta decisión, para que subsane los defectos anotados en las consideraciones, so pena de su rechazo, de conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 472 de 1998.

TERCERO: RECONOCER personería al abogado CARLOS ARTURO CARDONA GONZÁLEZ, identificado con la C.C Nro. 16.275.382 de Palmira, con T.P. Nro. 50.374 del C.S.J., en los términos del poder conferido por EL SEÑOR JOSÉ GABRIEL SALCEDO SÁNCHEZ.

¹ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, providencia de 7 de diciembre de 2005, expediente 2003-00782 AP.

CUARTO: Reiterar que, las comunicaciones y respuestas con ocasión de este trámite se recibirán en la siguiente cuenta de correo electrónico:

rpmemorialestadmvc Cauca@cendoj.ramajudicial.gov.co

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE

OMAR EDGAR BORJA SOTO
Magistrado

JGV